

SELECCIÓN

1



POLÍTICAS DE MEMORIA Y CONSTRUCCIÓN DE CIUDADANÍA

Ariel Jerez y Emilio Silva (eds.)



Post:Metro:Polis
(Lo que queda) después de



Asociación para la
Recuperación de la
Memoria Histórica

POLÍTICAS DE MEMORIA
Y
CONSTRUCCIÓN DE CIUDADANÍA

**POLÍTICAS DE MEMORIA
Y
CONSTRUCCIÓN DE CIUDADANÍA**

Contribuciones al congreso de La Granja de San Ildefonso,
julio de 2008

ARIEL JEREZ Y EMILIO SILVA (EDS.)

**Postmetropolis Editorial —ARMH (Asociación para la
Recuperación de la Memoria Histórica)**



Postmetropolis Editorial

Octubre de 2015

Edición, corrección y maquetación:
Carolina Esponiza Cartes y Pablo Sánchez León

Diseño de la portada:
Alejo Sanz y Miguel Ángel Martínez Muñoz

Referencia:

Ariel Jerez y Emilio Silva (eds.), *Políticas de memoria y construcción de ciudadanía* (Contribuciones al congreso de La Granja de San Ildefonso, 2008), Madrid, Postmetropolis Editorial – Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, 2015, 315 pags.

ISBN: 978-84-944500-0-6

A la memoria de Fernando Ruiz Vergara (1942-2011)

ÍNDICE

Introducción Cultura de derechos humanos y construcción de ciudadanía, <i>Ariel Jerez y Emilio Silva</i>	1
Conferencia inaugural Políticas de memoria y construcción de ciudadanía: transiciones, generaciones y memorias, <i>Isaac Rosa</i>	17
MEMORIA, DERECHOS HUMANOS Y CIUDADANÍA: MIRADAS TRASNACIONALES	
La “Memoria histórica” tras las experiencias iberoamericanas, <i>Javier Chinchón Álvarez</i>	35
Discursos y políticas de la memoria en España: una perspectiva transnacional, <i>Nina Elsemann</i>	54
Por una memoria activa, <i>Scott Boehm</i>	62
La apertura de fosas comunes de la Guerra civil española: discurso ético y generacional, <i>Marije Hristova</i>	69

MEMORIA Y TRANSICIÓN ESPAÑOLA

Historia y metahistoria de la democracia en España, <i>Pablo Sánchez León</i>	79
Los mejores tiempos, <i>Marta Sanz</i>	86
Sobre memorias y presentismos, <i>Carlos Taibo</i>	92
La transición: ¿manantial o cisterna?, <i>Jesús Montero</i>	100

MEMORIA, MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y ESFERA PÚBLICA

Los consensos de la transición y la mordaza informativa, <i>Alfredo Grimaldos</i>	111
Movimiento por la memoria y esfera pública, <i>Víctor Fco. Sampedro Blanco</i>	119
Otras víctimas de la transición. Persecución, secuestro y censura del filme <i>Rocío</i> , de Fernando Ruiz Vergara, <i>Ángel del Río Sánchez</i>	127
Memoria histórica en la prensa local, <i>Carlos Álvaro</i>	137

MEMORIA, EDUCACIÓN Y CIUDADANÍA

- Educación ciudadana para la Memoria histórica,
Rafael Feito 147
- La educación ciudadana de la memoria,
Ignacio Martín Jiménez 156
- La dictadura evanescente: el Franquismo en los textos de enseñanza
secundaria,
Fernando Hernández Sánchez 160
- La Memoria histórica en el aula,
Juan Francisco Arenas de Soria 166

MEMORIA, CONTRACULTURA Y MOVIMIENTOS SOCIALES

- ¿Hubo una transición tricolor? Memoria histórica, contracultura y
ciudadanía desde la transición española,
Germán Labrador Méndez 175
- Culturas a la contra para transiciones a la contra,
Jordi Mir García 182
- Memoria y metamemoria de la ciudadanía en España,
Pablo Sánchez León 188
- Retos para las memorias: olvidos y recreaciones,
Tomás R. Villasante 196
- El peso con el que carga nuestra generación,
Pablo Iglesias Turrión 220

MEMORIA Y PLURALISMO RELIGIOSO

¿Cómo incardinar hoy el ámbito religioso para reconstruir una memoria plural?,
José Manuel López Rodrigo

231

Memoria y diálogo laico-religioso,
Marta Velasco

239

Aportaciones desde el ámbito cristiano socialista para reconstruir una memoria plural,
Oscar Seco

246

MEMORIA, REPRESIÓN Y TRAUMA

Exhumar la derrota,
Francisco Ferrándiz

255

Trauma psíquico y transmisión intergeneracional,
Anna Miñarro

264

Estado de excepción, psicología social y memoria,
Joaquín Caretti Ríos

273

Psicología y derechos humanos: el caso de España,
José Guillermo Fouce

280

Lesbianas y Franquismo,
Raquel Platero Méndez

290

Acerca de los autores

305

Declaración de La Granja (2008)

313

INTRODUCCIÓN

CULTURA DE DERECHOS HUMANOS Y CONSTRUCCIÓN DE CIUDADANÍA

ARIEL JEREZ Y EMILIO SILVA

La transición a la democracia, no la de los años treinta —en la que el sufragio se hizo universal sumando al voto masculino el femenino— sino la que sucedió tras la muerte del dictador Francisco Franco, estaba dibujada en una pizarra. Escrita con la tiza de la Guerra fría y de la élite del régimen, cuyos intereses coincidían con los del país que tenía numerosas bases militares en sueño español, Estados Unidos.

Se trataba entonces de que los poderosos aliados internos mantuvieran su dominación, independientemente de que los y las votantes pudieran elegir a sus representantes, siempre dentro de un estrecho margen político.

Para que esa oligarquía pudiera transitar a la democracia era necesario convertir las violaciones de derechos humanos cometidas por la dictadura en un enorme secreto, ignorado, silenciado, oculto bajo un manto de miedo.

Afirmaba el himno oficioso de la transición —*Libertad sin ira*— que decían los viejos que en este país hubo una guerra, como poniéndolo en duda, como si fuera un delirio senil. Añadía el *gingle* publicitario, que trataba de vender aquel como un tiempo de buen rollo, eso de “guárdate tu miedo y tu ira”.

El miedo al regreso del monstruo fue una de las principales fuerzas políticas de la transición, con millones de votos fuera de las urnas que lo convirtieron en una de las fuerzas coaligadas con los diferentes gobiernos. La extrema derecha y los militares llevaron a cabo una importante labor en ese sentido; el miedo desatado para cortar la repolitización lógica que acompañó el cambio de régimen,

Políticas de memoria y construcción de ciudadanía

una estrategia de terror y guerra sucia para desmovilizar a los movilizados y para impedir que se movilizaran los inmovilizados.

La cultura política que ha llevado a la existencia de la ciudadanía a lo largo de la historia ha sido la consecuencia de una acumulación de situaciones injustas y traumáticas y de la articulación de nuevas aspiraciones. Los derechos humanos se han escrito con la sangre de millones de seres humanos, con la consciencia de que hay errores y terrores que no deben repetirse y con la lucha de ciudadanos y colectivos que han construido palancas de cambio para que la acción estatal sea más civil y civilizada, menos violenta y militarizada.

Cuando muere el dictador Francisco Franco, la democracia debe tomar una importante decisión: reparar o no las violaciones de derechos humanos de la dictadura, castigar a los culpables y depurar los poderes del Estado para que no sean un obstáculo para la construcción de una democracia de calidad. Pero las élites no quieren eso. Su decisión es vivir como si eso estuviera resuelto por el paso del tiempo. La fotografía de Juan Carlos de Borbón y su esposa Sofía el 20 de noviembre de 1978 con la viuda de Manuel Azaña, la exiliada Dolores Rivas, es un claro ejemplo. Tomada en México-DF apenas dos semanas antes del referéndum constitucional tras numerosas presiones diplomáticas, es la muestra de que la reconciliación y la reparación a las víctimas de la dictadura va a ser algo cosmético y que lo importante es mirar hacia adelante como si no hubiera pasado nada.

Para ello, la élite toma varias medidas, algunas que se presentan como conquistas de la oposición al régimen, otras como cesiones de los franquistas y otras como parte de una hoja de ruta. A las elecciones generales de junio de 1977 no se pudieron presentar partidos republicanos o que cuestionaran la monarquía o la amnistía. Entre ellos el partido de Manuel Azaña; el mismo rey Juan Carlos no hizo nada para que se legalizara: solo voló a México para hacerse una foto con la que quería representar que era “el rey de las dos Españas”. Las calles de muchas ciudades se veían envueltas por numerosos conflictos, muchos sindicales; unos, como consecuencia de la crisis de 1973 y la pérdida de calidad de vida, otros por la

emergencia de conflictos reprimidos por la dictadura, como las diferentes identidades culturales y políticas de España o la conquista de nuevos derechos. Todo ese ruido social sirvió en parte de cortina de humo, mientras detrás de ese telón las élites se cambiaban la camisa azul, diseñaban un sistema electoral con urnas para un sufragio restringido y convertían la amnistía en una enorme demanda política cuando la mayoría de los presos de conciencia ya estaban libres. Pero había que garantizar la impunidad de los franquistas a través de un parlamento de representación restringida.

Mientras se van apagando incendios sociales con nuevas leyes y encajes constitucionales, las élites franquistas ultiman su operación de blanqueo de sí mismas. Quienes realmente tenían que hacer la transición a la democracia eran aquellos que no creían en ella, quienes la habían ilegalizado durante cuarenta años, quienes habían hecho enormes fortunas sobre una terrible victoria militar, una durísima represión e incontables incautaciones de bienes.

En ese complejo proceso alguien grita que ha retornado la sociedad civil, pero lo que está ocurriendo es que nuestra *perestroika* ha dejado emerger a los sujetos movilizadados o pre-movilizadados para luego captarlos, integrarlos y reconvertirlos en burócratas de partido. Una especie de suelta de líderes sociales y políticos que en muchos casos acabarán siendo cuadros.

Mientras tanto, un sector de la sociedad que no puede esconder su miedo espera impaciente. A la muerte de Franco, en el Estado español hay por lo menos 114.226 hombres y mujeres desaparecidos por la represión de la dictadura y hay quien desea y espera que la democracia sea sinónimo de justicia. En 1978, promovido por el PCE (m-l) se presenta la propuesta de un Tribunal Cívico Internacional contra los Crímenes del Franquismo. En 1979, tras las elecciones municipales de abril y la victoria de partidos que habían sido clandestinos, en decenas de pueblos se inician exhumaciones de fosas y se denuncia la impunidad de esos crímenes.

Un nuevo movimiento social surge para reparar una herida del pasado. Se inicia en la ribera Navarra y La Rioja, se extiende a Soria y va salpicando municipios a lo largo y ancho del Estado,

incluso activando lo que años después podríamos reconocer como los primeros escraches por violaciones de los derechos humanos (como sucedió en Calahorra en 1981 frente a la casa de un jefe falangista local). Se trata de una leve movilización que si crece puede dar al traste con la principal operación de continuidad de las élites franquistas. Así que quienes más tienen que perder llaman al partido del miedo e introducen en el Congreso de los Diputados a un teniente coronel de la Guardia Civil para que grite, pistola en mano, “¡Quieto todo el mundo!”. Algo así como que todo el mundo deje de movilizarse.

El 23-F fue un cierre de caminos, un infarto que necrosó y desconectó del regreso de la democracia todo lo que podía haberle aportado la lucha ciudadana por los derechos humanos de las víctimas de la dictadura, las construcciones de nuevos referentes, el desplazamiento de la paternidad democrática de quienes redactaron, en un parador, una Constitución desmovilizadora de quienes de verdad sacrificaron hasta su vida por la defensa de las libertades. Ahora ya no era sólo la imposición del “es mejor olvidar” (¿mejor para quién?): ahora había una evidencia sólida y temida que se llamaba golpe de estado, que se llamaba “puede regresar la dictadura”.

Así que el susto del teniente coronel Tejero pareció por unos años hacer de cierre para convertir el Franquismo en el crimen perfecto: nadie devolvió nada de lo que robó, nadie tuvo que sentarse ante un juez por los derechos humanos que violó, las víctimas guardaban silencio, las universidades construían un relato de la transición en el que se decía que “todos perdieron la guerra” y “todos renunciaron a algo” en la transición. Felipe González contó en su entrevista con Juan Luis Cebrián en el libro *El futuro no es lo que era* (2002) que le dolía no haber abierto un debate sobre el pasado, pero que Gutiérrez Mellado, antes de ser presidente, le dijo: “¿Por qué no espera a que mi generación haya muerto para abrir un debate sobre lo que supuso la Guerra Civil y sus consecuencias?” (p. 35). Es obvio que la petición era clara: que los responsables de iniciar una guerra y de tanta represión murieran en la cama y sin disgustos, como murió el Caudillo. Sin coraje cívico ni conciencia

ética, González asumió hasta hoy una imposición militar que ha dejado culturalmente coja a nuestra democracia.

Pero el pasado no deja de rozar el presente, es el presente que va muriendo. Y al inicio del nuevo siglo se reinicia un movimiento social, con mejores herramientas científicas y comunicativas, relacionado con la búsqueda de los desaparecidos. Se trata de una movilización, llevada a cabo por los nietos y nietas de los desaparecidos y de las desaparecidas, que en 1998 han vivido cómo la justicia española detenía a Pinochet en Londres pero nunca ha hecho nada para reparar los daños causados por Francisco Franco, tan admirado por el dictador chileno. Conviene no olvidar que los medios de comunicación españoles, en principio ya democráticos en la década de los ochenta y noventa, nunca llegaron a elaborar la bien merecida imagen del “Pinochet español”, sino la de un “abuelo cascarrabias y autoritario” de la democracia.

El movimiento por la recuperación de la memoria, con más o menos consciencia, abre brechas en diferentes frentes. Por un lado, la reclamación directa de que, a pesar del paso de los años, el Estado es responsable. Por otro, sanear y orear un debate sobre la patológica relación con el pasado, algo que molesta a muchos historiadores que se sienten cuestionados. También era importante la reivindicación de una cultura de los derechos humanos, algo que los ciudadanos y ciudadanas de una democracia deberían traer de serie. Y por otro cuestionar la transición y los deberes que dejó pendientes mientras morían franquistas enterrados como demócratas y miles de demócratas no estaban todavía enterrados como personas.

Según ese movimiento se hace más complejo, se profundiza su debate, llega al Congreso de los Diputados, que aprueba una ley de la memoria, implica a la política, a la religión, a la cultura y academia consentidoras, se inicia una reflexión sobre la importancia que puede tener hacer justicia con ese pasado para construir ciudadanía.

El presidente de Alemania, Joachim Gauck, declaró en mayo de 2005 que la transición española había sido “un atentado contra los derechos”. Los derechos son construcciones de la ciudadanía,

concreciones de luchas, reivindicaciones, conquistas llevadas a cabo en torno de las grandes corrientes sociales. La lucha por la memoria histórica de la ciudadanía, de quienes antes que nosotras y nosotros se creyeron merecedores de derechos, es una labor para completar los miembros fantasmas de nuestra democracia y reconocer a quienes merecen el honor de ser honrados por los ciudadanos de este pasado presente.

El llamado movimiento de recuperación de la memoria y los derechos humanos viene planteando desde hace década y media estas cuestiones incómodas a la sociedad española, todavía espantada por la violencia política que vivió en el convulso siglo XX.

No es fácil avanzar hacia una *cultura de derechos humanos*, la aspiración emancipadora que ha tomado forma con el trabajo político asociativo que viene desarrollando la generación de lxs nietxs de lxs republicanxs pidiendo Verdad, Memoria y Justicia. A pie de fosa ellos y ellas siguen constatando las consecuencias del miedo cuidadosamente cultivado durante la Guerra civil y el Franquismo, prolongando un profundo dolor social y moral para mucha gente todavía más traumático por el propio silenciamiento, ocultamiento, difuminación y/o confusión promovidos en los años de la democracia.

Y también han intuido que sus secuelas han pesado sobre los valores democráticos, que no han logrado sobreponerse a una cultura de la impunidad largamente larvada en nuestras instituciones. De hecho, podríamos decir que este movimiento promueve la sospecha histórica dirigida hacia las bases institucionales y culturales que albergan la corrupción política, un factor clave para enfrentar la actual crisis económico-financiera, y que pesa distorsivamente sobre el juego democrático, según muestra la doble contabilidad que hoy los juzgados consideran ya probada en el origen del principal partido político de la derecha española.

Dentro de este movimiento cabe reseñar la colaboración entre la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica

(ARMH) y la Fundación Contamíname, con la que han intentado mantener una posición independiente frente a las presiones políticas

Esta colaboración se remonta a 2002 y al libro *Ciudadan@s de Babel. Diálogos para otro mundo posible* (Madrid, Punto de Lectura), donde Emilio Silva entrevistó a la *abuela* de la plaza de Mayo, Estela Carloto y a Juan Diego Botto, actor hijo de desaparecido argentino. Pero el momento de mayor visibilidad se alcanza en *Recuperando Memoria. Concierto Homenaje a los Republicanos*, realizado en Rivas-Vaciamadrid y donde estuvieron presentes más de doscientos republicanos y dos brigadistas internacionales, con la participación solidaria de una treintena de representantes del mundo de la cultura, y con asistencia de más de 25.000 personas.

En años posteriores continúan las estrategias de visibilidad: en 2005 con la campaña *Primavera Republicana* y el lanzamiento de un doble DVD con el concierto *Recuperando Memoria* (con 22.000 copias vendidas); en 2006 con el libro y la campaña *Memoria del Futuro* (Madrid, Visor), para celebrar el 75 aniversario de la II República española (con presentaciones del libro, exposición, verbena y conciertos en la Ciudad Universitaria) y un nuevo *Concierto Homenaje a l@s Brigadistas Internacionales* en Rivas-Vaciamadrid. En 2007 se editaba el DVD del nuevo concierto-homenaje y la ARMH y la Fundación Contamíname colaboraban con la campaña *Teatro por la Identidad* impulsada por las Abuelas de Plaza de Mayo para la recuperación de nietos secuestrados por los militares que pudiesen vivir en España.

En 2008, además de las Jornadas de La Granja sobre *Políticas de Memoria y Construcción de Ciudadanía* que ahora se editan y en las que las entidades organizadoras firmaron el manifiesto que cierra este libro, se realizarían otras, como las tituladas *¿Transición ejemplar? De la Constitución a la recuperación de la memoria* (2009, Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense, FCPS-UCM). Y con posterioridad continuaría su colaboración con *Transición, calidad democrática e impunidad* (2009, FCPS-UCM), *Memorias en*

Transición. Encuentro Iberoamericano sobre Derechos Humanos y Ciudadanía (2009, Círculo de Bellas Artes de Madrid) y las II Jornadas *Políticas Memoria y Construcción de Ciudadanía* (2011, Biblioteca Histórica de la UCM). Todavía en 2010 se volvería a lanzar a los quioscos, con el periódico *Público*, el DVD del concierto republicano, que vendió más de 80.000 copias.

También ambas entidades colaboraron en las dinámicas de movilización que se pondrían en marcha en 2010, donde emergería un marco interpretativo que hasta el momento había sido tabú: *la impunidad*. En el contexto de indignación creciente motivada por la expulsión del juez Baltasar Garzón de la Audiencia Nacional, se puso en marcha la *Concentración Permanente contra la Impunidad* (iniciada el 14 de abril en Escuela de Relaciones Laborales, UCM). Allí se preparó una *Manifestación contra la Impunidad del Franquismo*, ampliamente disputada con la izquierda sindical y partidaria, que aspiraba a encabezar su eslogan “Solidaridad con Garzón”, y que sacó a más de 70.000 personas a la calle el 24 de abril de 2010. En este año también se colaboraría en la puesta en marcha de una campaña del movimiento *Cultura contra la Impunidad*, con intelectuales y autores, que incluyó un video elaborado con artistas reconocidos que tuvo muy buena acogida en la opinión pública.

En este recorrido, acción y reflexión vienen alimentándose mutuamente para promover lo que ya hoy entendemos como una *cultura de los derechos humanos* que necesita normalizar nuestro país, pues este solo puede convertirse en una democracia madura asumiendo las recomendaciones que el Relator Especial de Naciones Unidas ha hecho para España en materia de *promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición*.

El *régimen del 78* tiene un pilar de legitimación en un marco de *reconciliación con olvido y silencio* que hasta hoy ha logrado mantener la memoria histórica desvinculada del marco democratizador de los derechos humanos. Cayó el dictador, pero los condicionados pactos de la transición mantuvieron el patrón oligárquico básico de redistribución material y simbólica del Franquismo, herencia altamente lesiva para los intereses de las

clases populares. Porque si bien en las décadas democráticas se produce un avance en el consumo y el bienestar, en términos comparados se constatan importantes limitaciones y atrasos en los derechos sociales y libertades civiles que en la coyuntura de crisis sumergen a las clases populares en situaciones de creciente exclusión, vulnerabilidad y dependencia.

Se trata de un esquema de dominación que da continuidad en la política oficial de la democracia a un imaginario y un patrón de comportamiento conformados en la dictadura, sin duda marcados por la *cultura del orden y mando* y la *retórica de la impunidad*. Una situación que mantiene las políticas largamente silenciosas y silenciadas por el “no te signifiqués”, pesada metáfora de la desaparición del ciudadano en la esfera pública que, incluso desde los limitados indicadores al uso en los estudios de cultura política, exhibe características evidentes de cinismo, desconfianza e impotencia políticas.

Conviene subrayar que el Franquismo no ha sido desactivado simbólicamente en la esfera pública. Su proyecto histórico de dominación mantiene vigente importantes trazas culturales en un patrimonio monumental importante (en placas, callejeros, monumentos, cruces, sobre todo en la *España interior*), con total permisividad de reivindicación y conmemoración, como demuestra la bien subvencionada Fundación Francisco Franco, así como a diario el sector más bronco de la llamada *Brunete mediática*. Cabe añadir que la activa omisión en los años de *democracia* de cualquier intento coherente de desarrollar una pedagogía política sobre el pasado traumático ha necesitado de una activa gestión, de carácter elusivo y cínico, del imaginario de la Guerra civil, la Dictadura franquista y la transición por los principales operadores de la esfera pública. En definitiva, como veremos más adelante, siguen existiendo amplios sectores mayoritarios que carecen de posicionamientos informados sobre nuestro pasado traumático.

La crítica del *movimiento de la memoria de la generación de lxs nietxs de lxs republicanxs* muestra una nueva voluntad colectiva de revisar el pasado y reclamar derechos de las víctimas. En cierta medida expresa una *dinámica madrugadora* en su crítica

al *régimen del 78*, el cual reacciona en forma de *conflicto de memoria* de amplio recorrido mediático-político con el revisionismo neofranquista. A pesar de ello, logra ampliar el campo de la propuesta y la protesta desde 2010, con movilizaciones, generando plataformas conjuntas de trabajo, y finalmente con las víctimas, poniendo en marcha la querrela ante la justicia Argentina. Este proceso ha implicado ciertos movimientos en el campo asociativo y en los posicionamientos de los partidos y organizaciones políticas que, aunque sea en el caso de la izquierda, conviene tener presente de manera somera, pues es obvio que a la derecha, que se limita a ser portadora del mercado como proyecto de futuro, le interesa estructuralmente la desmemoria política o los imaginarios religiosos ligados a su política moral, en el extremo siempre segregadora y represiva.

Si bien la confrontación revisionista de la derecha se dirige contra la izquierda sin distinguir partidos y movimientos, entre las distintas sensibilidades de las izquierdas partidarias y sindicales de ámbito estatal también a lo largo de la década se abre una más discreta *disputa interpretativa*. Esta ha estado acompañada de realineamientos y tensiones de orden generacional, entre bases y cúpulas orgánicas, en interacción con un mundo memorialístico con creciente espacio público.

Por su parte, el PSOE puede decirse que no cuenta con mimbres para cuestionar los consensos de la transición que garantizan la impunidad del Franquismo, y de hecho ha mantenido una calculada ambigüedad ante la problemática desde el principio de la transición. No puede el partido socialista evitar cuestionamientos de las bases que simpatizan e incluso participan del movimiento por la memoria y los derechos humanos, sin duda por ser los afiliados al PSOE y a UGT los que más antepasados tienen en las cunetas, por estar entre las organizaciones más numerosas durante los años treinta. Sus iniciativas legislativas han sido tardías e inocuas, han gestionado de manera calculada reparaciones y gestos simbólicos (brigadistas, exilio, etc.) y en general se mantienen en una comedida posición de apoyo al reconocimiento del derecho de las familias a enterrar a sus familiares.

Políticas de memoria y construcción de ciudadanía

Por su parte, a pesar de la ambigua y pobre gestión del patrimonio memorialístico del antifascismo durante la II República y de larga oposición antifranquista, el entramado IU/PCE ha intentado siempre hegemonizar el movimiento. Tampoco ha podido evitar posicionamientos muy encontrados en la valoración de la transición, que han llevado a escisiones internas y a que los distintos grupos se relacionen con mayor o menor comodidad con la agenda sobre Verdad, Justicia y Memoria que se ha ido consolidando en los últimos años. En el parlamento ha intentado forzar al PSOE a avanzar en la materia, y junto con CCOO ha impulsado diversas asociaciones que, de manera paulatina, han ampliado su horquilla de crítica a los consensos transicionales.

No obstante, en el conglomerado de la izquierda institucional perduran puntos de desacuerdo problemáticos.

El primero de ellos es la valoración de la ley de amnistía, todavía defendida como un logro democrático, pero cada vez más controvertida porque sigue siendo utilizada para negar las extradiciones requeridas por la justicia argentina, y su anulación es objeto de demanda en redes y organismos internacionales.

En su campo también se mantienen algunos custodios del *régimen del 78*, altamente refractarios a cualquier crítica generacional a su protagonismo político en la transición (como ha puesto de manifiesto el trabajo en la Cátedra de Memoria Histórica financiada por AMESDE, Fundación 1º de Mayo/CCOO y Fundación Largo Caballero/UGT), pero que muestran una gran dificultad para recomponer un relato subalterno integrador.

También es significativo que ni el PCE ni CCOO ni la Fundación Abogados de Atocha (creada en 2004) se hayan incorporado a la querrela argentina, siendo sus capacidades y recursos institucionales los más importantes en el campo progresista-crítico.

A pesar de ser compatibles, la estrategia de la “comisión de la verdad” (Baltasar Garzón con la izquierda sindical-partidaria) y la “querrela argentina” (sectores de izquierda crítica y organizaciones y militantes de base de la memoria) compiten sordamente por orientar la demanda del movimiento memorialístico.

Con esta perspectiva de fondo, es interesante leer retrospectivamente los materiales de estas Jornadas que realizamos en el verano de 2008 en La Granja de San Ildefonso. Tras un largo periodo de tensiones y reacomodamiento de las distintas posiciones mantenidas en el mundo asociativo de la memoria, éstas lograron convocarse. Su objetivo era pensar la memoria desde la perspectiva de la ciudadanía, lo que obligaba a no entenderla ya como un asunto propio, de familia política, de una identidad grupal proyectada hacia sus propios públicos internos del mundo asociativo, partidario o sindical. Se trataba de abordarla como problemática común y compartida por la cultura democrática del conjunto de la sociedad para empezar a entender la importancia de los esfuerzos que una comunidad política realiza en el intento de superar de manera adecuada el dolor, el miedo y la violencia de origen político, y así poder reconciliarse efectivamente en un futuro con proyecto compartido.

A lo largo de los años centrales de la primera década del milenio se inició un diálogo intergeneracional exploratorio, todavía hoy en buena medida considerado pendiente entre bastantes intelectuales, creadores y científicos sociales. Algunos de éstos disfrutan ahora de un considerable reconocimiento público, incluso disputan con éxito espacios electorales que reclamaron en estas jornadas —como es el caso de Pablo Iglesias, José Manuel López, Marta Sanz, Isaac Rosa, Javier Chinchón o Raquel Platero.

Los debates que recoge este libro se dieron en el contexto de la aprobación de la Ley de memoria histórica, coincidiendo con el único análisis que el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) ha publicado de forma monográfica sobre el tema¹. Se trata de una encuesta-estudio amplia que repasa los grandes consensos en torno al imaginario que gravita sobre el relato oficial de la transición modélica. Responde en ese sentido al contexto previo, marcado por

¹ Publicada la ley en el BOE el 26 de diciembre de 2007, el estudio del CIS (nº 2760, con estudios específicos para Catalunya y Euskadi) se publica en abril 2008 en el marco de un debate considerable en la opinión pública.

la emergencia del movimiento y la reacción neo-revisionista de la derecha política, que vuelve a agitar cada vez más en solitario el “miedo a revolver el pasado”. En buena medida aporta por tanto imágenes importantes de una cultura política lastrada por la gestión del miedo del régimen franquista y de la transición que es necesario seguir superando y transformando con nuevas políticas de memoria de corte democrático desde el enfoque integral de derechos humanos.

La pregunta 7 de la encuesta interroga sobre los “sentimientos” que provoca pensar en la Guerra civil y el Franquismo, donde prevalecen para el 71 por ciento el de “tristeza”, para el 37 por ciento la “rabia”, la incomprensión para el 26 por ciento y el miedo para el 22 por ciento². Es llamativo que entre las categorías a elegir no contemos con unos referentes sentimentales más acordes con la evaluación de un drama histórico a todas luces mal resuelto, como serían la indignación, incluso la impotencia. Y también lo es que sigan figurando los sentimientos “franquistas” por antonomasia, aunque con bajísimos niveles de respuesta: patriotismo (2 por ciento), orgullo (1 por ciento) y nostalgia (3 por ciento).

Esta aproximación sentimental hacia nuestro pasado traumático reciente denota confusión intelectual, escasez de información y ausencia de referentes ético-jurídicos que permitan el empoderamiento social propio de una cultura de los derechos humanos. La desinformación sigue marcando la pauta educativa: cuando se pregunta sobre el recuerdo que se tiene de la atención prestada en el colegio o instituto a la Guerra civil, nos encontramos con la desmemoria programada. Los que dicen que “mucha o bastante” (21,4 por ciento) son menos de un tercio de los que consideran que hubo “poca o ninguna” atención al tema (69,1 por ciento) —y sin perder de vista que ese porcentaje de los que consideran que se le prestaba atención lo haya sido en buena medida en el marco épico de la educación franquista que sufrieron los escolarizados en la posguerra.

² La pregunta 7 arroja estos porcentajes al sumar los sentimientos producidos en “1er y 2º lugar”.

Políticas de memoria y construcción de ciudadanía

Es llamativo también el alcance del ocultamiento familiar con objetivos de protección cuando se pregunta sobre el “recuerdo de las simpatías familiares con los ‘bandos’ de la guerra”. Un 18 por ciento de los encuestados recuerda que sus familiares fueron “nacionales”, un 28 por ciento que fueron republicanos, el 15 por ciento tuvieron familiares en ambos contendientes y un 13 por ciento en ninguno. Pero llama la atención que uno de cada cuatro encuestados (25,2 por ciento) dice no saber nada de la suerte corrida por sus abuelos o bisabuelos en un acontecimiento histórico de esta magnitud.

La política de memoria tardofranquista y de la transición tuvo un papel activo en este proceso de confusión colectiva, en la medida en que durante décadas impuso la equidistancia como marco interpretativo de la *guerra fratricida*. A la pregunta sobre “qué bando provocó más muertes durante la Guerra Civil”, un 30 por ciento acierta al señalar a los “nacionales”; pero al minoritario 4 por ciento que asume la interpretación *ultra* de que mataron más los republicanos también se suma el equiparador 36 por ciento que cree que ambos bandos mataron por igual. De nuevo, vuelve a ser llamativo que un 29 por ciento dice no saber qué responder. Algo parecido sucede cuando se pregunta sobre las responsabilidades de la Guerra civil: el 7 por ciento las atribuye a las izquierdas; el 30 por ciento a las derechas, un 39 por ciento a ambas y un significativo 23 por ciento vuelve a no saber dar respuesta. Parece que la ignorancia e inhibición intelectual sobre nuestro pasado reciente pesan sobre en torno a una cuarta parte de la población.

En este sentido son también significativos diversos acuerdos y desacuerdos sobre algunas afirmaciones que evidencian la distorsión historiográfica franquista como factor clave de esta impotencia intelectual. El 40 por ciento de los encuestados considera que “la 2ª República fue la primera experiencia democrática española” frente al 16 por ciento que lo niega, pero un amplio 38 por ciento considera que no sabe cómo posicionarse. Incluso un 16 por ciento está de acuerdo en *responsabilizar a la Segunda república de la Guerra civil* (frente al 35 por ciento que muestra su desacuerdo), pero vuelven a ser más del 40 por ciento

los que dicen no saber. Un poco más de un tercio (35 por ciento) dicen estar de acuerdo en que durante el Franquismo “hubo más paz y orden que ahora” frente al 42 por ciento que muestra su desacuerdo, un 13 por ciento que se mantiene neutral y un 9 por ciento que no sabe o no contesta. Solo un 24 por ciento asume la valoración dominante de que el Franquismo *trajo la modernización económica a España*, frente a más del doble que la rechaza (48,2 por ciento), un 10 por ciento que relativiza la afirmación y un 17 por ciento que no sabe o no responde.

Esta desinformación pública da continuidad a miedos e inhibiciones introyectados durante el Franquismo que parecen estar presentes en las orientaciones de al menos de un tercio de encuestados. Un 30 por ciento dice estar de acuerdo con que “en España todavía hay miedo a hablar del pasado”, frente al 56,6 por ciento que dice estar en desacuerdo (un 8 por ciento no está ni de acuerdo ni en desacuerdo con la afirmación y otro 7 por ciento no lo sabe). Un 34 por ciento cree que es “mejor olvidarse, porque si se remueve puede haber más conflicto civil”, frente al 47 por ciento que se muestra en desacuerdo, un 11 por ciento se mantiene neutro y un 9 por ciento no sabe o no contesta.

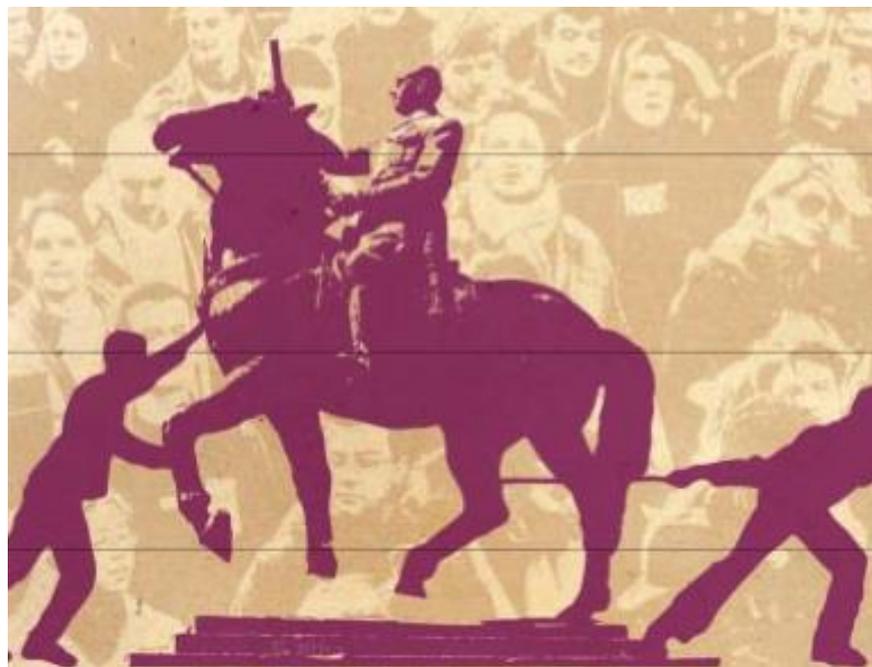
En este contexto de desinformación son significativos los resultados obtenidos en relación con lo que pueden considerarse nuevas demandas que empiezan a realizar las asociaciones de defensa de los derechos humanos a lo largo de la década. Estas muestran la evolución de la opinión pública gracias a la intensa actividad desplegada por el movimiento memorialístico a lo largo de la primera década del milenio.

Respecto a las *exhumaciones* un 50 por ciento está de acuerdo en realizarlas “con identificación y traslado a cementerios”, mientras que a un 14 por ciento le parece suficiente “identificar los enterramientos en fosas mediante archivos y conmemorarlos con placas”, frente a un 26 por ciento que cree mejor “dejarlo como está”. El 56 por ciento acuerda que “las víctimas del franquismo no han tenido el merecido reconocimiento” (aunque de nuevo un 25 por ciento dice que no sabe); el 68 por ciento incluso muestra su acuerdo sobre que “debe reconocerse a las víctimas durante la transición”

Políticas de memoria y construcción de ciudadanía

(un 16 por ciento no sabe). El 80 por ciento considera que “durante el franquismo hubo violación de los derechos humanos” y un 88 por ciento que “la gente no se expresaba por miedo”. En menor medida hay acuerdo mayoritario con la necesidad de “anular los juicios franquistas” (50 por ciento), frente al 19 por ciento que lo rechaza, y un 23 dice que no sabe o no quiere responder; también con la necesidad de “retirar los símbolos franquistas” (55 por ciento frente a 22 por ciento que lo rechaza), y que “debería haber monumentos para todas las víctimas” (71 por ciento frente a 10 por ciento) e incluso debería haber monumentos específicos para las víctimas del Franquismo (61 por ciento frente a 18 por ciento).

Todos estos datos permiten contemplar el trabajo desplegado durante esta década por el movimiento de nietos que reclama una nueva cultura de los derechos humanos. Y también reflejan la evolución de la opinión pública, que puede permitir desarrollar esta agenda de trabajo tan postergada en España y tan necesaria para su normalización internacional en esta materia fundamental para la educación democrática y la construcción de ciudadanía.



Políticas de Memoria y Construcción de Ciudadanía

14 al 19 de julio 2008

**La Granja de San Ildefonso
Segovia**

